

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **GLORIA AMPARO LOPERA BOLÍVAR**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-013-2021-00179-01.

AUTO

De conformidad con la escritura pública del 22 de diciembre de 2022, allegada vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de PORVENIR S.A. en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ OLEA portadora de la T.P. 359.508 del C. S. de la Judicatura, para que represente a PORVENIR S.A. en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se deje sin efectos su afiliación al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Igualmente, socita que se condene a COLPENSIONES, a reconocerle PENSIÓN DE VEJEZ, desde la fecha de la última cotización en el sistema general de pensiones a partir del 2 de enero de 2021, con los intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 o subsidiariamente la indexación.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora que se afilió al extinto ISS hoy COLPENSIONES el 26 de diciembre de 1984 hasta el 14 de febrero de 1992, y posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP PORVENIR S.A. el 2 de julio de 1997.

Expone que al momento del traslado PORVENIR S.A. no le suministró información adicional consistente en la edad mínima y el saldo que debía acreditar en la cuenta de ahorro individual, ni con que IBC debía cotizar con el fin de obtener una pensión anticipada o completar el capital para poder acceder a una pensión de vejez, ni la edad en la que se redimía el bono pensional, ni la diferencia entre la mesada pensional que recibiría en el RAIS y en el RPM, adicionalmente no le brindo reasesoria justo antes de cumplir los 47 años de edad.

Manifiesta que conforme a solicitud presentada a PORVENIR S.A., dicha entidad le indicó que no contaba con soportes de la asesoría brindada pues para la fecha se hacía de manera verbal, y que no era jurídicamente procedente declarar la nulidad de la afiliación, así mismo realizó reclamación administrativa ante COLPENSIONES solicitando el traslado de régimen, a lo cual dicha entidad responde que imposible reactivas la afiliación.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de primera instancia, despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, y condenando en consecuencia a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo las cotizaciones, cuotas o gastos de administración a partir del 01/09/1997, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, debidamente indexados.

Asimismo ordenó a COLPENSIONES, a recibir dichos dineros y a reactivar la afiliación de la demandante al RPM.

Igualmente, condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de vejez a la actora en los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, modificadorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y como retroactivo pensional condenó a pagar la suma de \$29.897.492 causado desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, y que a partir del 1 de mayo de 2022 continúe pagando una mesada pensional en cuantía de \$1.955.159, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos de Ley. La mesada inicial la liquidó en la suma de \$ 1.845.891.

Seguidamente autorizó a COLPENSIONES a realizar sobre el retroactivo adeudado la deducción respecto de los aportes al sistema de seguridad social en salud.

Para fulminar condena, la *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregaron la debida información a los afiliados al momento del traslado.

Luego, señaló que en el proceso no se probó por parte de PROTECCIÓN S.A. que, al momento de la afiliación del demandante, haya cumplido con el deber legal de otorgar explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado.

Argumenta que desde las sentencias SL 2877 de 2020 y 2329 de 2021 la CSJ se señaló que en las restituciones mutuas a parte de lo aportado en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos, los gastos y/o cuotas de administración se deberán incluir los aportes para la garantía de pensión mínima y de manera más reciente en providencias del mes de julio del año 2021 y siguientes la Corte también indicó que, también en las restituciones mutuas deben devolverse los valores utilizados en los seguros previsionales.

Finalmente condenó a COLPENSIONES a que dentro de los 4 meses siguientes al recibo de los dineros por parte de PORVENIR S.A. a reconozca y pague a la demandante, la pensión de vejez en los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, modificadorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, desde el 1 de febrero de año 2021, con un retroactivo entre esta fecha y el el 30 de abril de 2022 en la suma de

\$29.897.492, y a continuar pagando una mesada pensional en cuantía de \$1.955.159, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos de Ley.

Igualmente condenó a COLPENSIONES a indexar las mesadas pensionales y autorizó a COLPENSIONES a realizar sobre el retroactivo adeudado la deducción respecto de los aportes al sistema de seguridad social en salud.

Arguyó el juez que, la excepción de prescripción alegada por todas las demandadas no está llamada a prosperar pues es claro que el status pensional es un derecho fundamental que es irrenunciable e imprescriptible en tal virtud considera que hay relación inescindible entre el status pensional y la acusación, requisitos y valor de la pensión, motivo por los cuales estos desacuerdos en relación con el traslado de régimen pensional no se afectan por la excepción de prescripción como lo aclaró la CSJ en la SCL en la sentencia SL 1421 del año 2019.

Finalmente, declaró improbadas las excepciones de mérito propuestas por las demandadas, y condenó en costas a PORVENIR S.A. y en favor de la demandante.

3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:

La apoderada de PORVENIR S.A., apela la sentencia indicando que al momento de realizar el traslado PORVENIR S.A. cumplió con el deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, ya que los requisitos de información que aduce el despacho debían darse al momento de la afiliación de la demandante corresponden a disposiciones del Decreto 2241 de 2010 que para la época del traslado no se encontraba vigente.

Expone que no comparte el hecho de que las AFP tenían una obligación diferenciada para la época del traslado de la normatividad vigente, en tanto el único requisito formal documental que se debía conservar por parte de las AFP era los formularios de afiliación, esto en razón a que el legislador en la Ley 100 de 1993 no impuso obligaciones adicionales de entregar documentación en la cual quedaran consagradas las asesorías brindadas por las AFP, en tanto es un imposible jurídico y factico para las AFP probar que hubo una debida asesoría, por tanto si se retrotrae la circunstancia al momento en que la demandante realizó su traslado de régimen pensional, el deber de información era diferente y se encuentra satisfecho, como quedo debidamente probado con la documentación entregada con la contestación de la demanda.

Resalta del interrogatorio la confesión de la demandante, en la que indicó que su motivación para pretender esta ineficacia es que no se cumplieron con las expectativas de la pensión, lo cual no es procedente que el Tribunal Superior de Medellín justifique esta motivación, pues el respaldo de los procesos de ineficacia del traslado de fondo, es sobre un vicio en el consentimiento ante una omisión al deber de información, que para la época del traslado no se encontraba vigente como lo ha desarrollado la jurisprudencia y por tanto no puede ser exigible, pues el no cumplimiento de las expectativas pensionales no es prueba de una omisión al deber de información, además expone que la demandante está excusándose en su propia culpa, en tanto tuvo todas las posibilidades de subsanar la decisión que había tomado de trasladarse a PORVENIR S.A. trasladándose a COLPENSIONES, pero en su lugar decidió de manera tácita subsanar la supuesta vulneración del vicio en el consentimiento, pues desde el momento del traslado ha realizado aportes de manera consecuente a PORVENIR S.A., por lo que el acto de traslado es totalmente válido, pues cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad entonces vigente y no pesa sobre el ningún vicio u omisión que lo invalide.

Manifiesta que si llegase a prosperar la ineficacia del traslado le solicita al Tribunal no condenar en lo correspondiente a los gastos de administración, seguros previsionales y Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pues estos dineros no integran la cuenta de ahorro individual de la demandante, pues son descuentos ordenados por la Ley y que PORVENIR S.A. realizó en cumplimiento de la normatividad vigente y en una adecuada gestión fiduciaria, por lo que se están desconociendo las labores realizadas por PORVENIR y además generaría un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES puesto que no tiene la capacidad de generar dichos rendimientos financieros como lo hace en RAIS.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, todas las partes allegaron escritos de alegaciones, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DEMANDANTE.

Debe tener presente el despacho que a mi poderdante, la AFP privada, al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consiente sobre las

implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría e información, no puede hablarse que el traslado de régimen pensional se dio de manera libre y voluntaria, así las cosas, al no ser libre y voluntaria la decisión por el desconocimiento de las consecuencias que este le ocasionaría, el mismo se torna ineficaz, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 271 del mismo texto normativo.

En lo referente al derecho pensional de vejez que le fue concedido a la parte actora, el mismo también debe ser confirmado en la segunda instancia, pues tal y como lo verificó el despacho en la primera instancia, pues así se encuentra demostrado con las pruebas documentales que reposan en el expediente, la señora GLORIA AMPARO LOPERA BOLÍVAR cumple con la edad y las semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 09 de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de ese derecho pensional en el régimen de prima media con prestación definida.

ALEGATOS PORVENIR S.A.

1. Declaratoria de la Ineficacia de la afiliación al RAIS.

En este punto se debe anotar que, no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley pues:

- 1.1. Mi representada, al momento de realizar el traslado de la parte accionante al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues, se le entregó a la parte demandante la información necesaria y obligatoria para la época dentro del mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994.
- 1.2. Adicionalmente la parte demandante contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, por el contrario, permaneció en el mismo régimen pensional privado, de lo cual solamente es

posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

- 1.3. Por otro lado, la parte actora manifiesta que su motivación para iniciar este proceso es la diferencia en la mesada pensional entre los regímenes. Por lo tanto, es palmario que lo que motiva a la parte demandante a solicitar la nulidad o ineficacia de su traslado de régimen de pensiones no reposa en la forma en cómo este se produjo, sino en el supuesto hecho de no cumplirse sus expectativas sobre el eventual monto de la pensión que recibiría en este; monto que, como es obvio suponer, no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento. Esa es la razón por la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que de la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse un engaño.

Si lo anterior no fuera suficiente, se recuerda que, mi representada ha hecho campañas masivas para la educación del consumidor financiero y ha realizado diferentes comunicados de prensa informando cambios normativos, como se puede extraer de la documental aportada con la contestación de la demanda.

- 1.4. Aunado a lo anterior, Se recuerda que la prueba documental que extraña el juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, teniendo en cuenta lo anterior, no es cierto que mi representada se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado.
- 1.5. Asimismo, se resalta que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014, lo anterior fue recapitulado y objeto de pronunciamiento en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SL SL16882019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3464- 2019, en consecuencia, tales obligaciones no existían para la época de la afiliación y mucho menos las mismas se pueden aplicar de manera retroactiva.

- 1.6. En el presente proceso también se avizora un incumplimiento de la parte accionante del deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, lo anterior queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante, pues ésta dentro de su interrogatorio de parte, manifestó en diferentes ocasiones, no haber realizado comparaciones con otros Fondos Pensionales, no haber hecho preguntas o indagaciones en el momento de suscripción del formulario y no hacer uso de los diferentes canales de atención al usuario que tiene mi representada.
- 1.7. Por último, se resalta que la totalidad de condiciones del Régimen de Ahorro Individual no son impuestas por las Administradoras de Fondos Pensionales, por el contrario, dichas condiciones para adquirir diferentes prestaciones dentro del régimen se encuentran en la Ley 100 de 1993, en consecuencia, **la ignorancia o desconocimiento de esta no sirven de excusa**, tal y como lo establece el artículo 9 del código Civil Colombiano.

2. **La condena consistente en devolver a Colpensiones el valor de la cuenta de ahorro individual, incluyendo cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, debidamente indexados.**

Teniendo en cuenta lo argumentado en el aparte anterior y a la validez de la afiliación, consideramos que, la presente condena de traslado a Colpensiones de los valores recibidos con ocasión a la afiliación de la parte demandante consecuencialmente debe ser revocada.

Ahora bien, si se decidiera por parte del Honorable Tribunal dejar en firme la ineficacia de la afiliación, se solicita que no se condene a la devolución de los gastos de administración, los aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales, debidamente indexados, pues:

- 2.1. Las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, destinando así el 10% del IBC a las cuentas de ahorro

individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

En el presente caso, es claro que dichos descuentos, han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta del afiliado y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte que se han venido disfrutando hasta la actualidad y que no pueden retrotraerse pues la cobertura y el servicio ya se ha prestado y este último no es posible devolverlo o retrotraerlo al afiliado.

- 2.2. Atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas, derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico ordenando devolver o restituir un bien (en este caso una suma de dinero depositada) las sumas que invirtió para el mantenimiento de dicho bien e incrementarlo.

Por si lo anterior no fuera poco, se recuerda que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera antojadiza, sino por el contrario se dio de acuerdo con el mandato legal establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 y a la obligatoriedad de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el literal e) del artículo 60 de la ley 100 de 1993.

- 2.3. Toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que es imperioso en la actualidad, y de acuerdo a la coyuntura económica, hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, tal y como se estudió por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sala extraordinaria del 14 de agosto de 2019 a las 2 PM en virtud de lo establecido en el artículo 35 del CGP donde decidió unificar su jurisprudencia, en sentencia dentro del proceso del proceso

05001310500720150129501 negando las ineficacias de traslado en la afiliación, con base en la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

- 2.4. Las anteriores conclusiones frente a la ineficacia en la afiliación y en la manera en cómo deben operar las restituciones mutuas para hacer compatible el régimen y la sostenibilidad del sistema se han recogido y enriquecen con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000 el cual fue solicitado por ASOFONDOS.

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

COLPENSIONES en el acto jurídico de afiliación que se llevó a cabo entre la afiliada (la señora GLORIA AMPARO) y el Fondo Privado demandado, no tuvo incidencia alguna, ya que no participo del mismo; por lo tanto, los efectos jurídicos que surjan de este acto no lo pueden perseguir, ni mucho menos afectar.

Recordemos que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de COLPENSIONES se consolida por todo ese tiempo en que la demandante ha estado afiliada en el Régimen de Ahorro Individual; aunado a que la Seguridad Jurídica que se deriva de esta inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros que en este caso tiene un impacto directo frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y la planeación de la reserva pensional.

En desarrollo de los fines esenciales del Estado colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala: *“El Estado garantizará los derechos, **la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional**, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la Ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la Ley esté a su cargo. Las Leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.*

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros.

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que *“la sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”*, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

En este mismo sentido, y en caso de no aceptarse la tesis de la inoponibilidad frente al tercero de buena fe (COLPENSIONES), le solicito a los Honorables Magistrados que, al momento de revisar la decisión tomada por la Juez de instancia, se realice un test o juicio de proporcionalidad teniendo en cuenta que a éste lo componen 3 criterios fundamentales y necesarios a saber:

1. La idoneidad o adecuación de la medida tomada.
2. La necesidad de dicha medida: esto es que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios.
3. La proporcionalidad entre la medida tomada y los fines perseguidos con ella: es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes.

Así pues, considera esta apoderada que la decisión judicial tomada por la Juez de instancia el pasado 05 de mayo de 2022, repercute en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación (con efectos patrimoniales) en cabeza de COLPENSIONES, quien administra los aportes de miles de pensionados y afiliados.

Al aplicar este test de proporcionalidad, se podría claramente ver como no pasaría el segundo criterio, esto es, **“la necesidad”**; toda vez que sí existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado y es que precisamente se haga cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la declaratoria de dicha ineficacia,

la AFP a la cual se encuentra afiliado el demandante (quien es en últimas la parte incumplida).

Se resalta además que, imponer esa carga en cabeza de COLPENSIONES, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del Sistema, si se tiene en cuenta que COLPENSIONES es la única administradora del Régimen de Prima Media, alberga más número de pensionados y que dichas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado; de forma tal que se estaría solventando con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por un particular, que en este caso es la AFP privada, quien incumplió con su deber legal, tal como se pudo demostrar en el desarrollo de este proceso judicial.

No obstante, solicito respetuosamente a la Sala que en caso de no acoger la anterior petición, se CONFIRME la decisión en lo referente a que el Fondo Privado debe realizar la devolución y reintegro de las siguientes sumas: recursos de la cuenta de ahorro individual, cuotas de administración, cuotas abonadas al fondo de garantía mínima, rendimientos de la cuenta del demandante, anulación de bonos pensionales si existieren, porcentaje destinado al pago de seguros provisionales y gastos de administración, adicionalmente que dichos valores se entreguen a mi representada; y que tales conceptos deben ser trasladados **de manera indexada** dada la evidente pérdida del valor de la moneda o si la suma de todos los conceptos a trasladar resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que el demandante hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media; sea dicho fondo privado, quien asuma el pago de la diferencia que hubiere con cargo a sus propios recursos, evitando así un detrimento en las cuentas manejadas por COLPENSIONES. Lo anterior de acuerdo a lo expuesto en las sentencias SL 4.964 de 2018, SL 4.989 de 2018, SL 1.421 de 2019 y SL 1.688 de 2019 por cuanto precisamente la estabilidad financiera del sistema no se puede ver afectada por un acto que carece de eficacia.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

De confirmarse la decisión de declaratoria de ineficacia ante referida, se verificará si es procedente la condena en contra de COLPENSIONES de reconocer y pagar la

pensión de vejez a la demandante, y en caso afirmativo, los términos en que dicha prestación debe ser otorgada.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PORVENIR S.A., se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que,

además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la accionante, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS, hoy COLPENSIONES, según historia laboral aportada por COLPENSIONES que milita a folios 42 y 43 del expediente (Documento 17 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PORVENIR S.A. el 02 de julio de 1997 como se advierte del formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 75 del expediente (Documento 14 del expediente digital), con efectividad a partir del 1º de septiembre de 1997, conforme al certificado del SIAFP que obra a folio 73 del expediente (Documento 14 del expediente digital).

De otra parte, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no contaba para el 1º de abril de 1994 con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PORVENIR S.A. en el año 1997 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada

régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:16:05 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento (documento 32 del expediente digital), no se advierte que ésta haya confesado que la AFP PORVENIR S.A. le hubiere brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no expresa que se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, conforme lo ha señalado de vieja data la SCL de la CSJ, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PORVENIR S.A., siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de la *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1997 cuando se trasladó del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP PORVENIR S.A.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que, la orden impartida por la *a quo*, se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, sin embargo no existe la debida precisión de los dineros a transferir, y por tal razón debe ser PRECISADA, en el sentido de indicar que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. a COLPENSIONES deberá incluir la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, pues contrario a lo manifestado por la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada al declararse la

ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Teniendo en cuenta lo anterior, contrario a lo manifestado por la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deba asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

De otra parte, se afirma en los alegatos de COLPENSIONES, que la declaración de ineficacia del traslado del demandante al RAIS y la reactivación la afiliación al RPM, atenta contra el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano establecida en el artículo 48 de la Constitución Política.

Respecto del anterior argumento, se ha de manifestar, que para efecto de declarar la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, no es jurídicamente viable tener en cuenta el principio antes citado, pues, desde que el actor estuvo afiliado al RPM era beneficiario de las prerrogativas de este régimen pensional, conforme lo disponía la legislación, y por ello no es posible desconocer los derechos que tiene conforme las norma legales vigentes, so pretexto de someterse al principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, pues a este principio el que se tiene que someter es el legislador al realizar las reformas pensionales, no que el juez para desconocer derechos ya legislados.

De otra parte, el hecho que el actor regrese al RPM, de COLPENSIONES, no necesariamente le va a causar una carga financiera a esta entidad o mejor a los recursos del fondo común de los afiliados, por un mayor monto de la pensión en el RPM, pues en primer lugar no se encuentra probado en el proceso, que la pensión en el RPM vaya a ser superior a la del RAIS, y en segundo lugar el monto de la pensión de vejez, tanto en el RAIS como en el RPM depende de muchas situaciones de hecho ciertas y de voluntad del afiliado, que no están plenamente probadas en ese proceso, y otras que incluso pertenecen al mundo del azar, pues si un afiliado al RAIS decide hacer vida marital o casarse con una persona muy joven o tener hijos a avanzada edad

cuando está a punto de obtener la pensión de vejez, ello necesariamente influirá en que el monto de la pensión en el RAIS sea reducido, o si por ejemplo en el RPM por azar el afiliado pierde el empleo que le irrogaba un buen salario y no puede seguir cotizando como independiente con el IBC en los últimos 10 años, el valor de su pensión se va a ver menguado.

Pero es más, eventualmente pudiera suceder que un afiliado al RPM, fallezca sin que tengan beneficiarios que legalmente puedan acceder a las prestaciones de sobrevivientes y en tal caso, los dineros de sus cotizaciones, queden en el fondo común de COLPENSIONES. También puede suceder que el afiliado no alcance a obtener la pensión de vejez, sino la indemnización sustitutiva, la que es evidentemente inferior al monto de las cotizaciones con sus rendimientos. Igualmente puede suceder que el afiliado alcance a obtener la pensión de vejez, y fallezca sin tener beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, y que los dineros con los que contribuyó al fondo común no se hayan agotado, caso en el cual el saldo no utilizado queda perteneciendo al fondo común, lo que no pasa en el RAIS, pues los dineros deben ser entregados a los herederos.

Finalmente, en cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

DE LA CONDENA AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ A CARGO DE COLPENSIONES:

En cuanto a la condena al reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES, aspecto que se revisa en esta instancia en CONSULTA de la sentencia en favor de esta entidad, debe señalarse primeramente que habiéndose declarado la ineficacia del traslado de la accionante al RAIS, el derecho que tenga el demandante a la prestación de vejez, debe analizarse con los requisitos legales del sistema general de pensiones, consagrados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la ley 797 de 2003, por no ser esta beneficiaria de la transición del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como bien lo dejó establecido la falladora de primera instancia.

Aquella norma legal exige como requisitos para obtener la citada prestación, 57 años de edad en el caso de las mujeres y 1300 semanas cotizadas.

En este caso, la señora LOPERA BOLÍVAR, al haber nacido el 02 de enero de 1964, como se prueba con la copia de su cedula de ciudadanía que milita a folio 19 del plenario (Documento 02 del expediente digital), acredita que arribó a la edad mínima pensional de 57 años el mismo día y mes del año 2021, y que además cuenta con más de **1.300 semanas cotizadas** según la historia laboral actualizada al 23 de julio de 2021 aportada por PORVENIR S.A., con su contestación a la demanda visible a folios 36 a 48 del expediente, se concluye que efectivamente, como lo sentenció la falladora de primer grado, la demandante cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez en aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por lo que se confirmará igualmente dicho aspecto de la decisión consultada.

Respecto de la partida inicial del derecho al disfrute de la pensión de vejez, es necesario tener en cuenta que la Ley 100 de 1993, consagra en el inciso 2º del artículo 31, que al Régimen de Prima Media con Prestación Definida le *“Serán aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la citada ley.”*, de tal manera que como el derecho pensional de la actora le fue reconocido conforme al régimen de prima media con prestación definida, es por ello que le son aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte, a cargo de COLPENSIONES en lo que respecta a la causación y disfrute de la pensión, pues la Ley 100 de 1993, no trajo disposición que regulara o modificara este aspecto y es de esta manera que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, estipula literalmente que:

“La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.” (Subrayado agregado)

Ahora, en lo atinente a la desafiliación del sistema pensional, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha precisado que ella en principio se materializa reportado la novedad del retiro pensional, pero que no es esta la única forma de dar a conocer la intención de desafiliación para entrar a disfrutar de la citada prestación, pues ella se puede deducir de varios hechos, como lo son, peticionar el reconociendo de la pensión y cesar el pago de los aportes pensionales cuando ya se han cumplido los requisitos legales para tal fin.

Se explica por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL5603-2016, radicado 47236 del 06 de abril de 2016, *“mal haría el juzgador, excusado en que la norma es «clara» y en la idea errada subyacente de la infalibilidad del legislador, llegar a soluciones abiertamente incompatibles y desalineadas frente a lo que constituye el marco axiológico del ordenamiento jurídico. Por esto, un adecuado ejercicio hermenéutico debe integrar las distintas reglas de interpretación y los factores relevantes de cada caso, en procura de ofrecer soluciones aceptables y satisfactorias, debiéndose analizar en cada caso las situaciones particulares, pues si es evidente la voluntad de no continuar cotizando, lo que se infiere de la satisfacción concurrente de densidad de semanas y edad, ausencia de cotizaciones y solicitud de pensión de ello es viable inferir un retiro tácito”*. La anterior tesis además ha sido sostenida en sentencias con radicados 35.605 de 2009, 38.776 y 39.391 de 2011, retirada en las sentencias SL11895-2017, SL4661-2018, SL 401-2019 y SL929-2019, entre otras.

En el caso de la demandante, acredita haber solicitado la pensión de vejez a COLPENSIONES el 01 de febrero de 2021 como se observa a folio 67 (documento 02 del expediente digitalizado), por lo que como quiera que la actora cotizó hasta el mes de enero de 2021, confirme la citada historia laboral con fecha de generación del 23 de junio 2021, el disfrute ocurre desde el 01 de febrero de 2021 como lo decido la juez de primera instancia,

En cuanto al monto de la pensión a que se condenó a COLPENSIONES efectuadas la liquidación en esta instancia, se halla que la liquidación del a quo, presenta un error pues para actualizar los IBC se toma como IPC final el del año 2021, cuando lo correcto era tomar el año anterior al reconocimiento de la pensión, esto es, año 2020, por lo que la liquidación queda de la siguiente manera:

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-feb-11	28-feb-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-mar-11	31-mar-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-abr-11	30-abr-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-may-11	31-may-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-jun-11	30-jun-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-jul-11	31-jul-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-ago-11	31-ago-11	\$ 1.797.000	30	\$ 2.580.500	\$ 21.504	2020	105,48	2010	73,45
1-sept-11	30-sept-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-oct-11	31-oct-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-nov-11	30-nov-11	\$ 1.753.000	30	\$ 2.517.316	\$ 20.978	2020	105,48	2010	73,45
1-dic-11	31-dic-11	\$ 1.826.000	30	\$ 2.622.144	\$ 21.851	2020	105,48	2010	73,45
1-ene-12	31-ene-12	\$ 1.753.000	30	\$ 2.426.858	\$ 20.224	2020	105,48	2011	76,19
1-feb-12	29-feb-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-mar-12	31-mar-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-abr-12	30-abr-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19

1-may-12	31-may-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-jun-12	30-jun-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-jul-12	31-jul-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-ago-12	31-ago-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-sept-12	30-sept-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-oct-12	31-oct-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-nov-12	30-nov-12	\$ 1.831.000	30	\$ 2.534.841	\$ 21.124	2020	105,48	2011	76,19
1-dic-12	31-dic-12	\$ 1.907.000	30	\$ 2.640.056	\$ 22.000	2020	105,48	2011	76,19
1-ene-13	31-ene-13	\$ 1.831.000	30	\$ 2.474.577	\$ 20.621	2020	105,48	2012	78,05
1-feb-13	28-feb-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-mar-13	31-mar-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-abr-13	30-abr-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-may-13	31-may-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-jun-13	30-jun-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-jul-13	31-jul-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-ago-13	31-ago-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-sept-13	30-sept-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-oct-13	31-oct-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-nov-13	30-nov-13	\$ 1.888.000	30	\$ 2.551.612	\$ 21.263	2020	105,48	2012	78,05
1-dic-13	31-dic-13	\$ 1.967.000	30	\$ 2.658.379	\$ 22.153	2020	105,48	2012	78,05
1-ene-14	31-ene-14	\$ 1.888.000	30	\$ 2.503.106	\$ 20.859	2020	105,48	2013	79,56
1-feb-14	28-feb-14	\$ 1.888.000	30	\$ 2.503.106	\$ 20.859	2020	105,48	2013	79,56
1-mar-14	31-mar-14	\$ 2.050.000	30	\$ 2.717.885	\$ 22.649	2020	105,48	2013	79,56
1-abr-14	30-abr-14	\$ 2.042.000	30	\$ 2.707.279	\$ 22.561	2020	105,48	2013	79,56
1-may-14	31-may-14	\$ 1.945.000	30	\$ 2.578.676	\$ 21.489	2020	105,48	2013	79,56
1-jun-14	30-jun-14	\$ 1.945.000	30	\$ 2.578.676	\$ 21.489	2020	105,48	2013	79,56
1-jul-14	31-jul-14	\$ 1.945.000	30	\$ 2.578.676	\$ 21.489	2020	105,48	2013	79,56
1-ago-14	31-ago-14	\$ 1.994.000	30	\$ 2.643.641	\$ 22.030	2020	105,48	2013	79,56
1-sept-14	30-sept-14	\$ 1.945.000	30	\$ 2.578.676	\$ 21.489	2020	105,48	2013	79,56
1-oct-14	31-oct-14	\$ 1.945.000	30	\$ 2.578.676	\$ 21.489	2020	105,48	2013	79,56
1-nov-14	30-nov-14	\$ 1.945.000	30	\$ 2.578.676	\$ 21.489	2020	105,48	2013	79,56
1-dic-14	31-dic-14	\$ 2.026.000	30	\$ 2.686.066	\$ 22.384	2020	105,48	2013	79,56
1-ene-15	31-ene-15	\$ 1.945.000	30	\$ 2.487.685	\$ 20.731	2020	105,48	2014	82,47
1-feb-15	28-feb-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-mar-15	31-mar-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-abr-15	30-abr-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-may-15	31-may-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-jun-15	30-jun-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-jul-15	31-jul-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-ago-15	31-ago-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-sept-15	30-sept-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-oct-15	31-oct-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-nov-15	30-nov-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-dic-15	31-dic-15	\$ 2.036.000	30	\$ 2.604.075	\$ 21.701	2020	105,48	2014	82,47
1-ene-16	31-ene-16	\$ 2.036.000	30	\$ 2.438.979	\$ 20.325	2020	105,48	2015	88,05
1-feb-16	29-feb-16	\$ 2.279.000	30	\$ 2.730.075	\$ 22.751	2020	105,48	2015	88,05
1-mar-16	31-mar-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-abr-16	30-abr-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-may-16	31-may-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-jun-16	30-jun-16	\$ 2.193.000	30	\$ 2.627.053	\$ 21.892	2020	105,48	2015	88,05
1-jul-16	31-jul-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-ago-16	31-ago-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-sept-16	30-sept-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-oct-16	31-oct-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-nov-16	30-nov-16	\$ 2.194.000	30	\$ 2.628.251	\$ 21.902	2020	105,48	2015	88,05
1-dic-16	31-dic-16	\$ 2.212.000	30	\$ 2.649.814	\$ 22.082	2020	105,48	2015	88,05
1-ene-17	31-ene-17	\$ 2.194.000	30	\$ 2.485.405	\$ 20.712	2020	105,48	2016	93,11
1-feb-17	28-feb-17	\$ 2.342.000	30	\$ 2.653.062	\$ 22.109	2020	105,48	2016	93,11

1-mar-17	31-mar-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-abr-17	30-abr-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-may-17	31-may-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-jun-17	30-jun-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-jul-17	31-jul-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-ago-17	31-ago-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-sept-17	30-sept-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-oct-17	31-oct-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-nov-17	30-nov-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-dic-17	31-dic-17	\$ 2.341.886	30	\$ 2.652.933	\$ 22.108	2020	105,48	2016	93,11
1-ene-18	31-ene-18	\$ 2.414.403	30	\$ 2.627.647	\$ 21.897	2020	105,48	2017	96,92
1-feb-18	28-feb-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-mar-18	31-mar-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-abr-18	30-abr-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-may-18	31-may-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-jun-18	30-jun-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-jul-18	31-jul-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-ago-18	31-ago-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-sept-18	30-sept-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-oct-18	31-oct-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-nov-18	30-nov-18	\$ 2.535.249	30	\$ 2.759.166	\$ 22.993	2020	105,48	2017	96,92
1-dic-18	31-dic-18	\$ 2.437.670	30	\$ 2.652.969	\$ 22.108	2020	105,48	2017	96,92
1-ene-19	31-ene-19	\$ 2.437.669	30	\$ 2.571.253	\$ 21.427	2020	105,48	2018	100,00
1-feb-19	28-feb-19	\$ 2.437.669	30	\$ 2.571.253	\$ 21.427	2020	105,48	2018	100,00
1-mar-19	31-mar-19	\$ 2.437.668	30	\$ 2.571.252	\$ 21.427	2020	105,48	2018	100,00
1-abr-19	30-abr-19	\$ 2.437.668	30	\$ 2.571.252	\$ 21.427	2020	105,48	2018	100,00
1-may-19	31-may-19	\$ 2.437.668	30	\$ 2.571.252	\$ 21.427	2020	105,48	2018	100,00
1-jun-19	30-jun-19	\$ 2.437.670	30	\$ 2.571.254	\$ 21.427	2020	105,48	2018	100,00
1-jul-19	31-jul-19	\$ 2.515.187	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2018	100,00
1-ago-19	31-ago-19	\$ 2.515.188	30	\$ 2.653.020	\$ 22.109	2020	105,48	2018	100,00
1-sept-19	30-sept-19	\$ 2.944.667	30	\$ 3.106.035	\$ 25.884	2020	105,48	2018	100,00
1-oct-19	31-oct-19	\$ 2.515.188	30	\$ 2.653.020	\$ 22.109	2020	105,48	2018	100,00
1-nov-19	30-nov-19	\$ 2.515.188	30	\$ 2.653.020	\$ 22.109	2020	105,48	2018	100,00
1-dic-19	31-dic-19	\$ 2.515.188	30	\$ 2.653.020	\$ 22.109	2020	105,48	2018	100,00
1-ene-20	31-ene-20	\$ 2.515.188	30	\$ 2.555.896	\$ 21.299	2020	105,48	2019	103,80
1-feb-20	29-feb-20	\$ 2.626.459	30	\$ 2.668.968	\$ 22.241	2020	105,48	2019	103,80
1-mar-20	31-mar-20	\$ 2.575.720	30	\$ 2.617.408	\$ 21.812	2020	105,48	2019	103,80
1-abr-20	30-abr-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-may-20	31-may-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-jun-20	30-jun-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-jul-20	31-jul-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-ago-20	31-ago-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-sept-20	30-sept-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-oct-20	31-oct-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-nov-20	30-nov-20	\$ 2.610.764	30	\$ 2.653.019	\$ 22.108	2020	105,48	2019	103,80
1-dic-20	31-dic-20	\$ 3.141.975	30	\$ 3.192.828	\$ 26.607	2020	105,48	2019	103,80
1-ene-21	31-ene-21	\$ 2.436.875	30	\$ 2.436.875	\$ 20.307	2020	105,48	2020	105,48

TOTAL DÍAS	3600
TOTAL SEMANAS	514,29

Ingreso Base de Liquidación -IBL-	\$ 2.606.996,23
Semanas Cotizadas	514,29
Tasa de reemplazo	67,00%
Valor pensión	\$ 1.746.687

En cuanto al retroactivo pensional que se condena a pagar a COLPENSIONES liquidado desde 1 de febrero de 2021 y actualizado hasta el 31 de marzo de 2023, asciende a la suma de \$51.203.990, conforme la siguiente tabla:

Año	IPC	Valor real	# mesadas	Total retroactivo
2021	5,62%	\$ 1.746.687	12 Mesadas	\$ 20.960.244
2022	13,12%	\$ 1.844.851	13 Mesadas	\$ 23.983.061
2023		\$ 2.086.895	3 Mesadas	\$ 6.260.686
			TOTAL	\$ 51.203.990

A partir del mes de abril de 2023, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional de \$2.086.895, con los reajustes anuales subsiguientes en la forma que indica la Ley.

Respecto de la INDEXACIÓN que ordenó la *a quo*, de las mesadas pensionales retroactivas que se le deban pagar a la demandante, la misma es procedente, por cuanto con esta lo que se pretende es actualizar el valor adquisitivo de la moneda envilecida por el paso de tiempo, lo que es justo y equitativo en una economía inflacionaria como la nuestra. Así, la indexación de las obligaciones jurídicas en general, obedece a la necesidad de acoplar un fenómeno económico como lo es la depreciación constante del dinero, que se genera por el simple paso del tiempo, constituyendo la indexación no una sanción, sino un mecanismo resarcitorio o restaurativo de la moneda, en tanto, no se está pagando más de lo debido, sino la misma suma causada tiempo atrás traída al valor presente.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA, PRECISADA y MODIFICADA, en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. por haber sido vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2022 proferida por el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **GLORIA AMPARO LOPERA BOLÍVAR**, contra **COLPENSIONES** y **PORVENIR S.A.**, PRECISANDO que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. a COLPENSIONES deberá incluir la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional del actor, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia, en el sentido que el monto de la mesada pensional y el retroactivo causado entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de 2023, al que tiene derecho la demandante, es el que se indica en la tabla de la parte motiva de este fallo de segunda instancia. A partir del mes de abril de 2023, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional de \$2.086.895, con los reajustes anuales subsiguientes en la forma que indica la Ley.

En lo demás se CONFIRMA la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f5af100e8220fdeb6ec5495e39ff7068444bff4255ff7220adb2b0dfde027cab**

Documento generado en 13/04/2023 04:06:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>